

DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

RESOLUCIÓN NÚMERO ST-2113 DE 04 DE DIC 2025

“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025”

EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 A del numeral 1 del Decreto 2353 de 2019 y la Resolución No. 0038 del 15 de enero de 2025 y Acta de Posesión del 23 de enero de 2025 y,

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por los Decretos 1140 de 2018, 2353 de 2019 y 0714 de 2024, se modificaron los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.

Que mediante el Decreto 2353 de 2019, se creó la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, y las Subdirecciones Técnica de Consulta Previa, de Gestión de Consulta Previa y Corporativa.

Que el numeral 1º del artículo 16 A del citado decreto, le asignó a la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la función de *“Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran”*.

Que, en consideración con los antecedentes normativos descritos, por medio del presente acto administrativo, se procederá a desarrollar el análisis en virtud del recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025.

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante radicado No. **EXTMI13-0023345** del 28 de junio de 2013, el señor JAIRO HERNANDO ESTRADA ALVAREZ en calidad de Representante Legal del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos - ILSA solicitó a la entonces Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificación de presencia de comunidades étnicas para el proyecto **“PROCESO DE SUSTRACCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL PARA LA DECLARACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DE LOS MUNICIPIOS DE TIBÚ, EL TARRA, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN Y CONVENCION”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, San Calixto, El Carmen y Convención, en el departamento Norte de Santander.

1.2. En atención al radicado No. **EXTMI13-0023345** del 28 de junio de 2013, la entonces Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior expidió la Certificación Número 1656 del 31 de octubre de 2013 para el proyecto **“PROCESO DE SUSTRACCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL PARA LA DECLARACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DE LOS MUNICIPIOS DE TIBÚ, EL TARRA, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN Y CONVENCION”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, San Calixto, El Carmen y Convención, en el departamento Norte de Santander, mediante la cual certificó lo siguiente:

“PRIMERO. Que se registra presencia de la Comunidad Indígena perteneciente al Pueblo Motilón Barí, en un área aproximada de 73.850 hectáreas del total de 175.000 hectáreas que componen la Proceso de Sustracción de la Zona de Reserva Forestal para la Declaración de la Zona de Reserva Campesina, en el área del proyecto: “PROCESO DE SUSTRACCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL PARA LA DECLARACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DE LOS MUNICIPIOS DE TIBÚ, EL TARRA, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN Y CONVENCIÓN”, localizado en jurisdicción de los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, San Calixto, El Carmen y Convención, departamento Norte de Santander (...).”

“SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: “PROCESO DE SUSTRACCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL PARA LA DECLARACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DE LOS MUNICIPIOS DE TIBÚ, EL TARRA, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN Y CONVENCIÓN”, localizado en jurisdicción de los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, San Calixto, El Carmen y Convención, departamento Norte de Santander (...).”

1.3. Mediante radicado No. **2023-1-002410-038644 Id: 137919** del 26 de mayo de 2023, el señor LUIS ALBERTO HIGUERA MALAVER en calidad de Subdirector de Administración de Tierras de la Nación de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT solicitó a la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa para el proyecto **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL CATATUMBO UNA VEZ SE ADELANTE EL PROCESO DE SUSTRACCIÓN DE LA LEY 2DA DE 1959”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú en el departamento de Norte de Santander.

1.4. En respuesta al radicado No. **2023-1-002410-038644 Id: 137919** del 26 de mayo de 2023, la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior expidió la Resolución Número ST-1004 de 14 de julio de 2023 para el proyecto **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL CATATUMBO UNA VEZ SE ADELANTE EL PROCESO DE SUSTRACCIÓN DE LA LEY 2DA DE 1959”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú en el departamento de Norte de Santander, mediante la cual resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. Que procede la Consulta Previa con el Pueblo Indígena Motilón Bari, para el proyecto: “DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL CATATUMBO UNA VEZ SE ADELANTE EL PROCESO DE SUSTRACCIÓN DE LA LEY 2DA DE 1959”, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú, en el departamento Norte de Santander (...)

(...) SEGUNDO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: “DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL CATATUMBO UNA VEZ SE ADELANTE EL PROCESO DE SUSTRACCIÓN DE LA LEY 2DA DE 1959” localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú, en el departamento Norte de Santander (...)

(...) TERCERO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: “DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL CATATUMBO UNA VEZ SE ADELANTE EL PROCESO DE SUSTRACCIÓN DE LA LEY 2DA DE 1959” localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú, en el departamento Norte de Santander (...)

1.5. Mediante radicado No. **2025-1-002410-046556 Id: 557599** del 13 de junio de 2025, la señora LINA MARÍA SALCEDO MESA en calidad de Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT solicitó a la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa para el proyecto **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**”, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú en el departamento de Norte de Santander.

1.6. En respuesta al radicado No. **2025-1-002410-046556 Id: 557599** del 13 de junio de 2025, la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, emitió el oficio con número de radicado **2025-2-002410-026011 Id: 570506** de 8 de julio de 2025, mediante el cual solicitó información adicional respecto a la información espacial del proyecto **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**”, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú en el departamento de Norte de Santander.

1.7. Mediante radicado No. **2025-1-002410-056884 Id: 576481** de 17 de julio de 2025, la señora LINA MARÍA SALCEDO MESA en calidad de Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT, dio respuesta a la solicitud de información adicional realizada por esta autoridad mediante el oficio con número de radicado **2025-2-002410-026011 Id: 570506** de 8 de julio de 2025, para iniciar el trámite de determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa para el proyecto **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**”, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú en el departamento de Norte de Santander.

1.8. Una vez realizada la revisión y el análisis de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa en atención a la información allegada mediante el radicado No. **2025-1-002410-056884 Id: 576481** de 17 de julio de 2025 y aquella recibida con anterioridad con respecto al desarrollo del proyecto, la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior elaboro el informe técnico del 09 de septiembre de 2025.

1.9. Con base en las conclusiones arrojadas mediante el análisis e informe técnico del 09 de septiembre de 2025, la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa emitió la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025, por medio de la cual resolvió:

“(…)

RESUELVE:

PRIMERO. Que **PROCEDE** la consulta previa con el **PUEBLO INDÍGENA MOTILÓN BARÍ**, para el proyecto: **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**”, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

SEGUNDO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

TERCERO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

CUARTO. Que la información sobre la cual se expide la presente resolución aplica específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y entregadas por el solicitante mediante el oficio con radicado **2025-1-002410-056884 id 576481** del 17 de julio de 2025, para el proyecto: **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

QUINTO. Los efectos del presente acto administrativo se circunscriben al ejercicio del derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas objeto de la presente resolución para el proyecto: **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander. En tal sentido, no reconoce derecho adicional alguno, ni confiere potestades o prerrogativas distintas a las que aquí se enuncian; ni sustituye las funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, ni de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en materia de registro de comunidades étnicas.

SEXTO: Conforme a lo anterior si la parte interesada decide ejecutar el proyecto de que trata esta resolución, deberá solicitar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa el inicio del proceso de consulta conforme a los lineamientos del artículo 330 de la Constitución Política, los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, el decreto 2353 de 2019 y la Directiva Presidencial 10 de 2013 modificada por la Directiva Presidencial 8 de 2020.

(...)”

1.10. La Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025, fue notificada en debida forma el día 16 de septiembre de 2025 a los correos estipulados para dicho fin por parte de la solicitante.

1.11. Mediante los radicados No. **2025-1-002400-079047 Id: 620198** del 26 de septiembre de 2025 y **2025-1-002410-080371 Id: 622839** del 01 de octubre de 2025, la señora LINA MARÍA SALCEDO MEZA, obrando en calidad de Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación (SATN) de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), elevó recurso de reposición y

en subsidio de apelación en contra de la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025, por medio de la cual se resolvió la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas en virtud del desarrollo del proyecto **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú en el departamento de Norte de Santander, solicitando se revoque el numeral primero de dicho acto administrativo.

2. PETICIÓN DE LA RECURRENTE

Por medio del recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto, la recurrente requiere se revoque el artículo primero de la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025, adoptando en su lugar una decisión por medio de la cual se determine que no procede el agotamiento de la consulta previa con el Pueblo Indígena Motilón Barí, en virtud del desarrollo del proyecto denominado **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú en el departamento de Norte de Santander.

Refiere en su escrito la Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación de la Agencia Nacional de Tierras lo solicitado de la siguiente forma:

“(…)

Primero. Que se admita el presente recurso de reposición y en subsidio de apelación.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior se revoque el numeral primero de la RESOLUCIÓN ST-1435 DE 16 DE SEPTIEMBRE 2025, en el sentido de determinar que NO procede la consulta previa con PUEBLO INDÍGENA MOTILÓN BARÍ, para el proyecto: **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

“(…)”

3. ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

El recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025, realiza un ejercicio argumentativo centrado en controvertir dos ideas principales de dicho acto administrativo, a saber:

1. En primer lugar, la recurrente discute la existencia de traslapes entre el proyecto y el territorio ancestral de la comunidad.

2. Y en una segunda posición, se refiere al tipo de iniciativas que se desarrollan al interior de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), con miras a anular la idea del desarrollo de una economía agrícola intensiva como una de las supuestas conclusiones derivadas del análisis de determinación y procedencia de la consulta previa realizado por este Despacho.

Por lo cual, dado que la recurrente finca su posición de contradicción en estas dos ideas principales, corresponde plasmar lo referido frente a cada una de ellas.

Entonces, en cuanto al primer argumento que plantea controvertir la recurrente, se refiere a la existencia de traslapes con el territorio ancestral de la comunidad étnica, plasmando lo expuesto en el acto administrativo y su posición de la siguiente manera:

“(…)

Es necesario citar el sustento utilizado para la decisión tomada, referente a las siguientes afirmaciones:

(…) Por tanto, si el proyecto se establece en áreas que el pueblo Barí reclama como ancestrales o en proceso de ampliación/saneamiento de sus resguardos, impondría una figura jurídica ajena a su propia concepción territorial y a sus derechos colectivos, generando una alteración a su situación jurídica sobre la tierra y su capacidad de ejercer su propia gobernanza y autonomía sobre el territorio (...)

(…) Que, realizado el análisis cartográfico, geográfico y espacial de los contextos del proyecto y de comunidades étnicas, se estableció que se evidencia coincidencia entre los mismos, (...)

El marco normativo que reglamenta la figura de ZRC y el proceso para su delimitación y constitución define que no es posible que esta figura se trasape con territorialidades étnicas y para esto se definen varias acciones para garantizar esto lo largo del proceso.

El parágrafo del artículo 2.14.13.1 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1147 de 2024, que indica lo siguiente:

“PARÁGRAFO. No procederá la constitución de ZRC en las siguientes áreas:

1. Las comprendidas dentro del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, Parques Nacionales Regionales y las reservas forestales protectoras de la SINAP.
2. En los resguardos y los territorios ancestrales y/o tradicionales de pueblos indígenas, según lo previsto en los artículos 2.14.7.1.2 y 2.14.7.1.3 del Decreto 1071 de 2015.
3. En los territorios colectivos y los territorios ancestrales y/o tradicionales de comunidades negras, raizales o palenqueras conforme a lo dispuesto por la Ley 70 de 1993 y otras normas vigentes.
4. Las reservadas por la ANT u otras autoridades públicas, para otros fines señalados en las leyes.
5. Las que hayan sido constituidas como Zonas de Desarrollo Empresarial.” (Subrayado fuera del texto original)

A partir de la aceptación de la solicitud de ZRC con el lleno de los requisitos, la ANT, adelanta la validación técnica y jurídica tomando en cuenta el análisis de cruce de información cartográfica para determinar si existe trasape con alguna de las excepciones establecidas.

Adicionalmente se solicita a la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) constancia sobre la existencia de traslapes con resguardos y los territorios ancestrales y/o tradicionales de pueblos indígenas, según lo previsto en los artículos 2.14.7.1.2 y 2.14.7.1.3 del Decreto 1071 de 2015. En los casos de advertir trasape con alguna de las excepciones se comunica a los solicitantes y se revisa de manera conjunta entre la ANT y las organizaciones, propuestas de ajuste al polígono para continuar con el trámite. Dicha información se solicita previa expedición de Resolución de inicio de trámite de constitución de la ZRC.

(…)”

Y continúa la recurrente su relato frente a la gestión realizada ante la Dirección de Asuntos Étnicos mencionando:

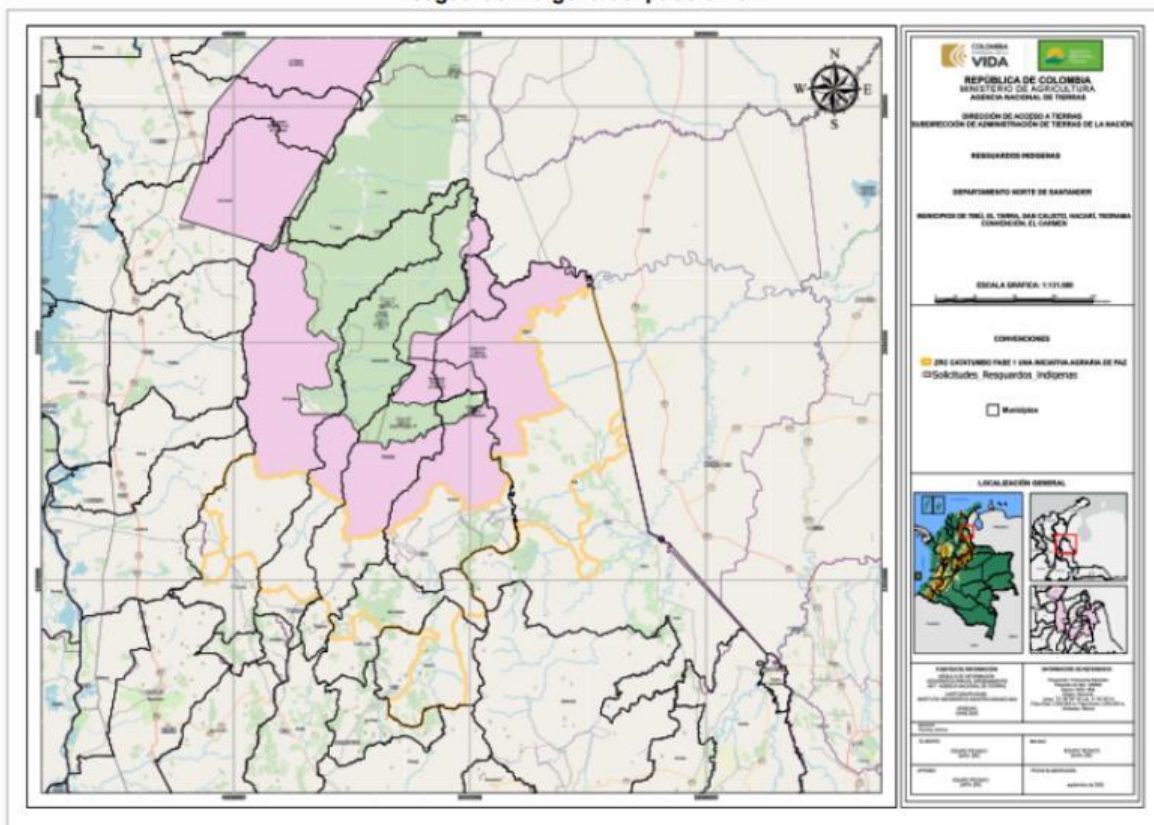
“(…)”

Para el caso concreto, mediante radicados No. 202543000197573 del 3 de junio y 202543000204163 del 6 de junio de 2025, la SATN le solicitó a la DAE el análisis y resultado sobre la existencia de procesos de compra, solicitudes y formalizaciones de territorios para comunidades

étnicas dentro del polígono objeto del procedimiento de delimitación y constitución de la ZRC Catatumbo “Fase 1 Una Iniciativa Agraria De Paz” y mediante respuestas con radicados No. 202550000199043 del 4 de junio y 202550000212023 del 10 de junio de 2025, nos informan que **no presentan traslape** con solicitudes de formalización de territorios colectivos a favor de comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades negras y no se están adelantando procesos de compra en dicha zona.

Por lo anterior se concluye que no existe coincidencia entre el ámbito de ampliación del polígono pretendido como ZRC y los territorios formalizados, ni las pretensiones ancestrales y de ampliación del pueblo Bari, de acuerdo con la siguiente salida gráfica:

Mapa polígono de aspiracion ZRC Catatumbo Fase 1, Una Inicativa Agraria de Paz y solicitud de ampliación del resguardo indigena del pueblo Bari



Fuente: Elaboración propia ANT

(...)

Así, pasamos en segundo lugar, a la idea que expone la recurrente en donde a su parecer la Subdirección Técnica se equivoca al plantear que el desarrollo y creación de la Zona de Reserva Campesina pudiese generar afectaciones en las fuentes de sustento y/u oficios tradicionales. Expone el recurso interpuesto:

(...)

Otro de los argumentos utilizados es que la ZRC promovería la agricultura intensiva dentro del territorio pretendido que coincide con áreas ancestrales del pueblo Bari afectando sus formas de sustento:

*“(...) Por otro lado, la economía tradicional Bari se basa en la abundancia de recursos de su territorio, como la caza y la pesca. Si la ZRC **promueve una economía agrícola intensiva en áreas ancestrales o de interés para los Bari**, afectaría directamente sus fuentes de sustento y sus oficios tradicionales, forzándolos a adoptar modelos económicos occidentales y generando una pérdida de su autonomía alimentaria”.*

El Título 13 de la Parte 14 del Decreto 1071 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 1147 de 2024 establece los objetivos de las ZRC como figura del ordenamiento ambiental, social y productivo de la propiedad, fijando directrices para encausar al interior de ellas la acción institucional, orientados a la materialización de los derechos del campesinado.

Algunos de los objetivos que plantean las ZRC, son (i) la creación de condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas, (ii) el control de la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria, (iii) la regulación, limitación y ordenamiento de la ocupación y aprovechamiento de la propiedad y la tenencia de predios y terrenos rurales, (iv) la superación de las causas que vienen originando graves o excepcionales conflictos de orden social y económico, la preservación del orden público y el apoyo a los programas de sustitución de cultivos ilícitos, (v) la adopción de estrategias o decisiones que tiendan a evitar o corregir los fenómenos de concentración de la propiedad, el acaparamiento de tierras rurales, o cualquier forma de inequitativa composición del dominio. (vi) la protección y conservación de los recursos naturales renovables y del ambiente, (vii) la creación de las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo de la economía campesina, buscando la transformación de los campesinos y colonos en medianos empresarios, dentro de principios de competitividad, sostenibilidad, participación comunitaria y equidad, (viii) el fortalecimiento de los organismos de concertación de la reforma agraria y el desarrollo rural en los respectivos departamentos y municipios, así como de las organizaciones representativas de los colonos y campesinos, para garantizar su participación en las instancias de planificación y decisión regionales, así como la efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales.

Como se ve, los objetivos de la ZRC no están asociados al desarrollo de economías extractivas o implantar modelos de desarrollo que no consideren el equilibrio y la protección ambiental, por esta razón sus apuestas están enmarcadas en la economía familiar y campesina, en la soberanía alimentaria y siempre de la mano de apuestas de orden ambiental para la protección del territorio.

Además, en la etapa de construcción del Plan de Desarrollo Sostenible la ANT debe realizar procesos de concertación con los actores del territorio, armonizar este instrumento con las prioridades definidas en los diferentes instrumentos de ordenamiento existentes y acatar el régimen de usos del suelo rural y las determinantes ambientales, así lo dispone el artículo 2.14.13.10 del Decreto 1071 de 2015 adicionado por el Decreto 1147 de 2024:

"Artículo 2.14.13.10. Elaboración de Planes de Desarrollo Sostenible. Los PDS, sus instrumentos y herramientas serán elaborados y concertados por las organizaciones representativas de las comunidades campesinas con el apoyo técnico de la ANT y la ADR.

La responsabilidad presupuestal y financiera para llevar a cabo la labor prevista en este artículo será asumida por la ANT bajo los principios de participación reforzada y autonomía de las comunidades campesinas.

Parágrafo 1. Los PDS se armonizarán con las prioridades establecidas por los municipios a través de los Concejos Municipales de Desarrollo Rural - CDMR, como instancias de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y los organismos y entidades públicas y privadas en materia de Reforma Agraria, desarrollo rural y Reforma Rural Integral, con los planes básicos y/o esquemas de Ordenamiento Territorial, planes de desarrollo municipal, Planes de Acción para la Transformación Regional - PATR, Pactos Municipales para la Transformación Regional - PMTR, Planes de Reparación Colectiva que tengan o puedan tener incidencia en el polígono pretendido para la constitución de ZRC, los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo - PISDA, donde coincida la delimitación de la ZRC con subregiones cobijadas por los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET y con zonas donde se adelanten programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Para efectos de la armonización aquí prevista, se podrá consultar tales planes y programas, y solicitar concepto a las entidades concernidas en ellos acerca de los programas y proyectos que se contemplen en el PDS. Así mismo, se deberá invitar a los delegados de esas entidades para que expresen sus observaciones sobre dicha armonización de los planes.

Parágrafo 2. Los PDS acatarán el régimen de usos del suelo rural y las determinantes ambientales."

Por lo anterior se concluye que con la constitución de la ZRC no se busca promover la agricultura intensiva, por el contrario, las principales propuestas en materia productiva presentan una estructura basada en sistemas de pequeña y mediana escala, con predominio de cultivos permanentes como el cacao y el café y la cría de especies menores, por otra parte, en materia ambiental, se han definido líneas dirigidas a la conservación y gobernanza forestal, al cuidado del agua, todo lo cual quedara consignado en la zonificación ambiental de la ZRC. Razón por la cual definir que la ZRC promoverá la ganadería intensiva no es un argumento cierto puesto que esto no está alineado a los objetivos de la zona.

(...)"

Teniendo en cuenta así las ideas que expone la ciudadana para soportar los dos argumentos principales de su ejercicio contradictorio, procede entonces este despacho a realizar el análisis de las mismas para decidir frente a la pretensión elevada.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

4.1. DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA:

El derecho a la Consulta Previa tiene sustento en principios reconocidos desde el mismo preámbulo de nuestra Carta Política y reiterados a lo largo del texto constitucional. En primera medida, encontramos precisamente que la Constitución Política estableció como uno de los pilares de nuestro Estado Social de Derecho el principio de participación democrática (preámbulo, Art. 1º), y como fin esencial del Estado, el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.

Así mismo, nuestra Carta Fundamental reconoció que Colombia es un Estado pluralista que garantiza y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación (Art. 1º, 7º, 8º, 10º).

De igual manera, el artículo 330 de la Constitución Política establece con relación a los territorios indígenas, lo siguiente:

"Artículo 330: De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:

(...) PARÁGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades."

En virtud de lo anterior y en consonancia con el compromiso de establecer especial protección a la diversidad étnica y cultural del país, el Estado Colombiano suscribió el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley 21 de 1991, haciendo parte del bloque de constitucionalidad¹.

El mencionado Convenio consagra en el artículo 6º, el derecho a la Consulta Previa de los pueblos indígenas, conforme al siguiente texto:

"1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

- a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente (...)"*

¹ En Sentencia C-225 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional incorporó la noción de bloque de constitucionalidad, compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución.

A su turno, el artículo 7° ibídem, dispone:

*“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”*

Es así como, el Convenio 169 de la OIT establece una serie de responsabilidades que deben asumir los gobiernos, a efectos de proteger los derechos de los pueblos, lo que se traduce en:

“1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

- (a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;*
- (b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;*
- (c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida”².*

En consecuencia, para el cumplimiento del mandato previamente señalado, la jurisprudencia constitucional ha fijado una serie de principios que gobiernan la actuación tanto de las autoridades administrativas intervinientes en los procesos de consulta, los interesados en el proyecto, obra o actividad o las medidas legislativas y administrativas, y las comunidades étnicas.

El primero de ellos, se refiere al principio de la **buena fe** que debe guiar la actuación de las partes, lo que significa que debe existir un ambiente de claridad y de confianza de cara al proceso, el cual se genera a partir de la información y transparencia entre las partes involucradas. En este sentido, la Constitución Política, previó en su artículo 83, qué:

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

Así mismo, se deberá atender al cumplimiento del **principio de igualdad**, bajo la perspectiva de que la consulta previa se constituye en un proceso de diálogo intercultural entre iguales; lo que se traduce en que ni los pueblos indígenas tienen un derecho de veto que les permita bloquear decisiones estatales, ni el Estado tiene un derecho a la imposición sobre los pueblos indígenas para imponerles caprichosamente cualquier decisión³ sino que opera un intercambio de razones entre culturas que tiene igual dignidad y valor constitucional (CP art 70).⁴

² Artículo 2. Convenio 169 de la OIT.

³ Sentencia T-704 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

⁴ Sentencia SU 123 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos – Rodrigo Uprimmy Yepes

Adicionalmente a lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que el proceso consultivo debe ser **flexible**, lo que se traduce en que debe adaptarse a las necesidades de cada asunto, en tanto que, debe atenderse a la diversidad de los pueblos indígenas y de las comunidades afro descendientes; lo que implica respetar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas y que la misma sea efectuada mediante relaciones de comunicación.

Del mismo modo, se ha previsto que la consulta previa debe ser **informada**, en tanto que, a través de dicho procedimiento se le otorgan una serie de elementos a las comunidades para la toma de decisiones de manera libre y espontánea, por lo que no puede tratarse de un asunto de mero trámite formal sino de un esfuerzo genuino del Estado y los particulares implicados por conocer las perspectivas de los pueblos afectados y por efectivamente lograr un acuerdo.

Todo lo anterior, sobre la base que aquello que se consulta, y sus impactos solo serán materializados posteriormente a la finalización del proceso consultivo, de allí que la identificación de los posibles impactos se efectúa en abstracto y no en concreto.

4.2. DEL CRITERIO DE PROCEDIBILIDAD DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA

En reiterada Jurisprudencia Constitucional se ha determinado que no todo proyecto, obra, actividad, medida administrativa y/o legislativa implica *per se* el desarrollo del proceso de consulta previa con las comunidades étnicas. Sobre el particular la Honorable Corte Constitucional manifestó:

*“(...) No todo lo concerniente a los pueblos indígenas y tribales está sujeta al deber de consulta, puesto que como se ha visto, en el propio Convenio se contempla que, **cuando no hay una afectación directa, el compromiso de los Estados remite a la promoción de oportunidades de participación que sean, al menos equivalentes a las que están al alcance de otros sectores de la población**”.*⁵ (Subrayado fuera del texto)

Por lo tanto, la consulta previa debe agotarse en aquellos eventos en que el proyecto, obra o actividad pueda afectar directamente los intereses de las comunidades indígenas o tribales en su calidad de tales, es decir, que su obligación sólo resulta exigible cuando la actividad pueda:

*“(...) alterar el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios (...)”*⁶. La alta Corte ha definido la afectación directa como *“(...) la intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales abrazadas por las comunidades como propias”*⁷. Que se puede manifestar cuando: *“(...) (i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido.”*⁸

⁵ Sentencia C- 030 de la Corte Constitucional de 2008 del 23 de enero de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil

⁶ Sentencia C-175 de 2009

⁷ Sentencia T – 745 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

⁸ Sentencia SU – 123 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes.

4.3. COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, actúa de conformidad con la Carta Política de 1991, que consagró el reconocimiento y la especial protección de la diversidad étnica y cultural en el país, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 21 de 1991, conformando el bloque de constitucionalidad.

De conformidad con lo anterior, la consulta previa surge como un derecho constitucional, mediante el cual el Estado garantiza a las comunidades étnicas afectadas por un proyecto, obra o actividad (en adelante POA), medida legislativa o administrativa, la participación previa, libre e informada sobre el proyecto o medida que se pretenda realizar, buscando que de manera conjunta y participativa se identifiquen los posibles impactos que estos puedan generar, con el fin de salvaguardar la idiosincrasia de las comunidades étnicas que habitan en el país.

Para dar cumplimiento a lo antes señalado encontramos como marco normativo:

1. El Decreto 2353 de 2019, crea dentro de la estructura del Ministerio del Interior la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, convirtiéndola en garante dentro del Desarrollo del proceso de consulta previa, con la misión de atender entre otras tareas, la de impartir los lineamientos para la determinación de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a comunidades étnicas.
2. Específicamente el artículo 4 que modificó el artículo 16 del Decreto 2893 de 2011, modificado por el Decreto 1140 de 2018, que señala las funciones de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior:

“1. Impartir los lineamientos para la determinación de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a comunidades étnicas”.

Es así como dentro de la competencia fijada por la ley a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, se pueden resumir entre otras en: i) La determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa; y en ii) Dirigir y coordinar los procesos de consulta previa. Se trata entonces, de competencias que han sido fijadas de manera única y exclusiva a esta Dirección del Ministerio del Interior, sin que otra autoridad administrativa tenga competencia para ello.

5. FUNDAMENTOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE REPOSICIÓN

5.1. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde, entonces, determinar si como menciona la recurrente y en virtud de las consideraciones expuestas se realizó un análisis de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa indebido en el acto administrativo recurrido, y se incurrió en un error al determinar que existen posibles afectaciones directas en cabeza del colectivo étnico y por lo tanto procede el agotamiento de la Consulta Previa con el Pueblo Indígena Motilón Barí en ocasión del desarrollo del proyecto denominado **“DELIMITACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CATATUMBO FASE 1 “UNA INICIATIVA AGRARIA DE PAZ”, EN LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN, EL TARRA, TIBÚ Y CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”**, localizado en jurisdicción de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú en el departamento de Norte de Santander.

5.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA RESOLVER

Una vez revisadas las consideraciones realizadas por la recurrente en su análisis argumentativo, las cuales se expusieron en el capítulo tercero de la presente resolución, se ha establecido que el recurso interpuesto se enfoca en presuntamente desvirtuar las que considera son las dos ideas principales del sustento que dio pie a lo resuelto en la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025.

Dado que dichas ideas principales se controvierten en aras de establecer que no procede el agotamiento de la Consulta Previa con el Pueblo Indígena Motilón Barí en virtud del desarrollo del proyecto, cree procedente este despacho que primero debe abordarse la razón de una determinación de procedencia, el procedimiento que la establece, y el concepto de afectación directa. Y más aún, ya que la posición de la recurrente se basa en argumentar una ausencia de traslape entre la Zona de Reserva Campesina y el territorio del colectivo étnico y el desarrollo de una economía “familiar y campesina de la mano de apuestas de orden ambiental para la protección del territorio” dentro de la misma.

Sea entonces menester destacar que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, actúa de conformidad con la Carta Política de 1991, que consagró el reconocimiento y la especial protección de la diversidad étnica y cultural en el país, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual fue adoptado en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 21 de 1991, conformando así el bloque de constitucionalidad.

Así las cosas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2353 de 2019, el cual modificó la estructura del Ministerio del Interior, creando a través de su artículo 4 la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la cual, “ *funcionará con autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica*” y que cumplirá entre otras la función de determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas o administrativas, o la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a comunidades étnicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se trata entonces, de una competencia que **ha sido fijada de manera única y exclusiva a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, sin que otra autoridad administrativa tenga competencia para ello.**

De conformidad con lo esbozado, no es dable iniciar o desestimar un proceso de consulta previa para un proyecto, obra, actividad, y medida legislativa o administrativa, hasta tanto no se haya realizado el análisis en cabeza de este despacho de conformidad con la normatividad y jurisprudencia constitucional vigente para tal efecto. Por lo tanto, el ejecutor de un POA, medida legislativa o administrativa deberá presentar ante esta Dirección la debida solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la Consulta Previa.

Por consiguiente, mediante el Decreto 2353 de 26 de diciembre de 2019, se modificó la estructura del Ministerio del Interior, y se estableció y creo la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, cuya obligación legal y constitucional asignada es la de determinar la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para la ejecución de proyectos, obras o actividades y medidas administrativas o legislativas, de acuerdo con el criterio de afectación directa.

Anterior al mencionado Decreto, existía la Dirección de Consulta Previa, la cual emitía certificaciones de presencia o no de grupos étnicos, **aun cuando la misma tenía como objeto la determinación de procedencia o no de la consulta previa, más que una declaración geográfica o de ubicación de comunidades.**

En ese orden de ideas, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa emite una resolución (acto administrativo) donde se establece si procede o no la consulta previa con alguno o varios de los grupos étnicos para un proyecto, obra o actividad específica. Dicha resolución determinará si se hace necesario iniciar un proceso de consulta previa con uno o varios grupos étnicos, o si, por el contrario, dicha actividad, obra o proyecto no requiere la

realización de la misma. Es importante aclarar que el análisis de la procedencia y oportunidad de la consulta previa con ocasión de la ejecución de un proyecto, obra o actividad se realiza a partir del concepto de afectación directa, el cual supera el concepto de existencia; es decir, este despacho analiza si determinados proyectos son susceptibles de ocasionar posibles afectaciones directas sobre una comunidad étnica en grado de intensidad tal, que termine por cooptar sus usos y costumbres en detrimento de su identidad étnica y cultural. Por lo tanto, la presencia en el área de influencia de un proyecto, obra o actividad no es suficiente para determinar un proceso de consulta previa.

Así mismo, el inicio de dicha actuación, procedimiento o análisis en cabeza de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa inicia en uno de dos momentos; Al recibir la solicitud que presente la entidad promotora o el ejecutor del proyecto, obra o actividad, la cual deberá cumplir con los requisitos indicados en el formato denominado **“SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONSULTA PREVIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES** o “Anexo 1 Versión 8”⁹; O en ocasión de un mandato judicial que establezca la necesidad del mismo, dada una comprobada vulneración de derechos, usualmente por medio de una solicitud de verificación en campo por parte de este Dirección. Cabe resaltar, que el análisis realizado por esta Subdirección se hace de forma previa al inicio del proyecto, obra, actividad o medida, en virtud que, de decretarse la existencia de una posible afectación directa, deberá llevarse a cabo la consulta previa con la comunidad o comunidades determinadas antes del comienzo de cualquier actividad o proyecto.

Al decretarse la realización de la Consulta Previa, la misma deberá efectuarse de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial No. 8 de 9 de septiembre de 2020 y Directiva Presidencial No. 10 de 7 de noviembre de 2013 y esta dependencia es garante de lo ahí establecido, pero no cuenta con las facultades judiciales que permitan realizar el procedimiento de oficio.

Con respecto a la ubicación de los proyectos analizados, en nuestro procedimiento el ejecutor de un proyecto nos informa sobre la ubicación geográfica y cartográfica del mismo, y con dicha información procedemos a revisar las bases de datos de otras direcciones del Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras) y diversas entidades gubernamentales (Agencia Nacional de Tierras, Alcaldías, DANE, IGAC, ICANH, entre otros) que tienen dentro de sus competencias llevar la información de ubicación geográfica de comunidades, para realizar el análisis de afectación directa sobre éstas en raíz a las características del proyecto. De acuerdo al mismo, para cada caso específico y la ubicación de cada proyecto, definimos si procede o no la consulta previa con una o varias comunidades.

Así, por ejemplo, la Base cartográfica de resguardos indígenas constituidos (Agencia Nacional de Tierras), Base de datos (espacial y no espacial) de Resguardos indígenas de Origen Colonial (Agencia Nacional de Tierras - IGAC) y la Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de Tierras), se toman en consideración para el análisis. Como quiera que según las competencias de la Agencia Nacional de Tierras, en especial las contenidas en el artículo 4 numerales 26 y 27 del Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015, señalan:

“Artículo 4°. Funciones. Son funciones de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes:

(...)

26. Ejecutar el plan de atención a las comunidades étnicas, a través de programas de titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas, adquisición, expropiación de tierras y mejoras.

27. Adelantar los procesos agrarios de deslinde y clarificación de las tierras de las comunidades étnicas”.

⁹ <https://www.mininterior.gov.co/documentos-direccion-de-la-autoridad-nacional-de-consulta-previa/>

Es así como, la información cartográfica producida por la ANT contiene:

- (I) Titulación, ampliación y saneamiento de territorios colectivos
- (II) Estudios Socioeconómicos, Jurídicos y de Tenencia de tierras
- (III) Estudios de Función Social y Ecológica.
- (IV) Pretensiones o solicitudes de titulación colectiva

Por su parte, la consulta que se hace de la Base de datos de la Dirección de Asuntos indígenas y Comunidades Rom, se justifica en el hecho que el artículo 13 numeral 7, del Decreto 2863 de 2011, modificado por el Decreto 2340 de 2015, ordena llevar el registro de las comunidades indígenas del país. La norma señala:

“ARTÍCULO 13. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS. Son funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, las siguientes:

7. Llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los resguardos indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales o cabildos indígenas y su actualización.”

Así las cosas, pone a disposición de los ciudadanos los siguientes datos relacionados con Comunidades indígenas:

- (I) Asociaciones Indígenas a nivel nacional
- (II) Comunidades que están ubicadas dentro de los resguardos indígenas a nivel nacional
- (III) Comunidades indígenas a nivel nacional que no están asentadas dentro de los resguardos indígenas
- (IV) Relaciones pueblos por departamento
- (V) Resguardos indígenas a nivel nacional
- (VI) Solicitudes de registro y de estudio etnológico
- (VII) Resoluciones que adoptan registros y estudios etnológicos
- (VIII) Mapa de caracterización de Comunidades Indígenas

De la misma forma se recurre a la consulta de la Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras, y se justifica en el hecho que el artículo 14 numeral 7, del Decreto 2863 de 2011 y las funciones establecidas en el Decreto 1640 de 2020, ordenan llevar el registro de las mencionadas comunidades del país. La norma señala:

“ARTÍCULO 14. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS. Son funciones de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, las siguientes:

(...)

7. Llevar el registro único nacional de los consejos comunitarios, organizaciones de base, y representantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

(...)”.

En este sentido, cuenta dentro de sus competencias compilar la siguiente información:

- (I) Organizaciones de Base Inscritas en Dirección de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Mininterior
- (II) Solicitudes de Autorreconocimiento
- (III) Consejos Comunitarios Inscritos en la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Mininterior
- (IV) Consejos Comunitarios con título colectivo adjudicado por el INCORA, INCODER, o la Agencia Nacional de Tierras (ANT),

- (V) Consejos Comunitarios con solicitud de titulación colectiva en trámite de adjudicación
- (VI) Resoluciones de inscripción en el registro

Finalmente se consulta la Base de datos de Consulta Previa, la cual se ha construido en desarrollo de nuestra funcional misional que nos ha permitido recolectar información en campo, mediante la realización de las visitas de verificación. Adicional a ello, con la creación de la Dirección de Consulta Previa en el año 2011, también se dio paso al Sistema de Información de Consulta Previa-SICOP que conserva la información de los procesos consultivos adelantados desde el año 2012, que es el resultado de aquellos trámites en donde se determinó que se debía adelantar consulta previa. Este sistema contiene:

- (I) Proyectos, obras o actividades, medidas administrativas objeto de consulta previa
- (II) Comunidades étnicas consultadas
- (III) Municipios en los que se han adelantado consultas previas

Luego de la consulta y análisis de las bases de datos mencionadas, en concordancia con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 10 del 07 de noviembre de 2013 y la Directiva Presidencial No. 08 del 09 de septiembre de 2020, puede proceder visita de verificación en campo.

Esta decisión, recae y es potestativa de este despacho, pues será quien determine si la información allegada por el ejecutor y la consulta realizada, recopilan información suficiente para realizar una adecuada determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa para el proyecto, obra o actividad bajo estudio, o si por el contrario se requiere la realización de la mencionada visita.

Ahora, con respecto al concepto de afectación directa, de manera general puede afirmarse que la consulta previa procede, en principio, frente a dos tipos de decisiones o medidas: **i)** la ejecución de proyectos, obras o actividades, y **ii)** la adopción de medidas administrativas o legislativas de carácter general. En ambas situaciones lo que determina la obligatoriedad de la Consulta Previa, es que las medidas o decisiones que se pretendan adoptar causen una afectación específica y directa en las comunidades étnicas. En concreto, la Sentencia SU - 123 de 2018 recoge el criterio de afectación directa como:

“(...) el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. **Procede entonces la consulta previa cuando existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afro descendiente.**”

Siguiendo con la sentencia de unificación, ésta indica que:

“El territorio se encuentra vinculado al concepto de afectación directa y en consecuencia a la aplicación de la consulta previa. No existe duda ni disputa sobre la regla precisada. La dificultad de aplicación es porque la noción de territorio étnico va más allá de un espacio físico formalmente demarcado, como un resguardo, y se vincula a elementos culturales, ancestrales así como espirituales.”

En ese orden, la corte ha reconocido dos conceptos de territorio: geográfico y amplio:

“i) El geográfico, que comprende el espacio reconocido legalmente bajo la figura del resguardo u otras figuras semejantes, como la de territorios colectivos de las comunidades afro descendientes; y ii) el territorio amplio, que incluye las zonas que habitualmente ha ocupado la comunidad indígena, al igual que los lugares en donde tradicionalmente los mencionados sectores de la sociedad han desarrollado sus actividades sociales, económicas, espirituales o culturales.”

Y en consideración al concepto de territorio amplio, la referida sentencia estableció que:

*“(…) las autoridades deben tomar en consideración en el caso concreto **los elementos económicos, culturales, ancestrales, espirituales que vinculan a un pueblo étnico a un determinado espacio como soporte material de su existencia y diversidad cultural.***

*Igualmente, conforme al principio de proporcionalidad, en este territorio amplio es posible que las autoridades competentes, para determinar si existe o no afectación directa por impacto en el territorio, **tomen en consideración la intensidad y permanencia efectiva** con la cual un pueblo étnico ha ocupado o no un determinado espacio específico, **el grado de exclusividad** con el cual ha ocupado esas porciones territoriales, al igual que sus particularidades culturales y económicas como pueblo nómada o sedentario, o en vía de extinción.”*

De todo lo anterior resulta claro entonces que el procedimiento de determinación de procedencia o no de la consulta previa tiene como base fundamental la identificación de posibles afectaciones directas sobre comunidades étnicas en ocasión del desarrollo de un proyecto, obra, actividad y/o medida determinada. Y resultan posibles, ya que es un análisis que se realiza de forma previa a la ejecución del proyecto, siendo esta segunda la única instancia donde podrían ser ciertas o no. Y resulta claro entonces también que esta Subdirección no emite los actos administrativos en función a los términos de traslape, superposición o cercanía con el área del proyecto, si no que el análisis técnico que se realiza para determinar la procedencia o no de la consulta previa tiene como fundamento el concepto de afectación directa.

Hecha la anterior contextualización y conclusión, resulta menester analizar la posición expuesta por la recurrente en el recurso interpuesto.

Con respecto a lo esbozado por la recurrente en su primer argumento, se identifica que su posición consta de referir un apartado del desarrollo de una de las conclusiones contenidas en la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre, y luego, en mencionar que la normativa no permite la creación de Zonas de Reserva Campesina en los territorios pertenecientes a pueblos indígenas, y que luego de consultarlo con la Dirección de Asuntos Étnicos, dicha dependencia confirmó que no se presenta traslape entre el polígono del proyecto de Zona de Reserva Campesina con solicitudes de formalización de territorios colectivos a favor de comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades negras y no se están adelantando procesos de compra en dicha zona.

Como primero, este despacho quiere reiterar que el Pueblo Indígena Motilón Barí, de acuerdo a las fuentes propias y de otras entidades (mencionadas en el procedimiento descrito anteriormente) habita en la cuenca binacional del río Catatumbo, y su gran territorio se ubica tanto en la República de Colombia como en la República Bolivariana de Venezuela, en la Serranía de los Mutilones, conformado por 2510 personas, hablantes de su lengua materna Barí-a, reconocidos como una etnia milenaria que ha habitado la espesa selva húmeda tropical nororiental del Catatumbo. Este pueblo indígena tiene adjudicadas tierras con dos Resguardos Indígenas correspondientes al RESGUARDO INDÍGENA MOTILONA BARÍ (BARIRA) DE CATALAURA, constituido mediante la Resolución Número 0105 de 15 de diciembre de 1981, expedida por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, en jurisdicción de los municipios de Teorama y El Tarra en el departamento de Norte de Santander; y el RESGUARDO INDÍGENA MOTILÓN BARÍ, constituido mediante la Resolución Número 0102 de 28 de noviembre de 1988, expedida por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, en jurisdicción de los municipios de El Carmen, Convención y Teorama en el departamento de Norte de Santander.

Adicionalmente, las comunidades Saphadana, Batroctora, Irocobingcayra, Isthoda y Beboquirá del pueblo Motilón Barí se encuentran asentadas por fuera de los resguardos formalizados en los municipios de Tibú y el Tarra, en áreas pretendidas para ampliación de acuerdo al proceso que transcurre en la Unidad de Restitución de Tierras (2019), a saber,

“Demanda de restitución de derechos territoriales en favor de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, y de las comunidades Saphadana, Batroctora, Irocobingcayra, Isthoda y Beboquira del Pueblo Indígena Barí”.

Con respecto a lo anterior y las actividades del Pueblo Indígena Motilón Barí, refiere la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025 en su página 12:

“(…)

Las prácticas seminómadas permitían la circulación de la población en el territorio, la sostenibilidad de los recursos naturales al basar sus tiempos de permanencia en la productividad y disponibilidad de productos de caza y pesca, y la acumulación de conocimiento geoespacial. No obstante, estas prácticas fueron reducidas por la pérdida de territorio objeto de la colonización campesina, la operación petrolera, y el desplazamiento forzado por el conflicto armado y la dispersión de cultivos ilícitos. Debido a este último factor, este pueblo se ha reconocido como sujeto colectivo objeto del proceso de restitución de derechos territoriales étnicos¹².

(…)”

Llegados a este punto, piensa este Despacho que resulta procedente referirnos y plasmar lo citado por la recurrente al comenzar el desarrollo de su primer intento de desvirtuación, pues es sólo una parte de una elaboración mas juiciosa por parte de esta Subdirección, de la cual se pueden concluir aseveraciones no realizadas si no se cuenta con el contexto adecuado. Entonces, refiere la Resolución No. ST – 1435 en la finalización de su página 12 y página 13 (se resalta en naranja lo único referido por la recurrente en su misiva):

“(…)”

En relación con el proyecto, el polígono correspondiente a la Zona de Reserva Campesina colinda por el lindero norte con la pretensión territorial de ampliación del Pueblo Motilón Barí. Así mismo, con respecto a los territorios formalizados al pueblo Motilón Barí, el área de interés del proyecto se encuentra a una distancia aproximada de 13 kilómetros en línea recta sentido suroeste del resguardo indígena Motilón Barí, y a una distancia aproximada de 10 kilómetros en línea recta sentido sureste del resguardo indígena Motilona Barí (Barira) Catalaura.

Sin embargo, la creación de una ZRC implica un cambio en la destinación de los territorios, dándoles una vocación agrícola, lo cual choca con el esquema tradicional Barí que privilegia la caza y la pesca. Esto interferiría con su cosmovisión, ya que la Ishta (territorio) es la base de su existencia y su identidad. La constante invasión territorial y la imposición de economías ajenas han debilitado sus prácticas culturales.

Por otro lado, la economía tradicional Barí se basa en la abundancia de recursos de su territorio, como la caza y la pesca. Si la ZRC promueve una economía agrícola intensiva en áreas ancestrales o de interés para los Barí, afectaría directamente sus fuentes de sustento y sus oficios tradicionales, forzándolos a adoptar modelos económicos occidentales y generando una pérdida de su autonomía alimentaria

Adicionalmente, considerando que el proyecto es una forma de ordenamiento territorial que busca formalizar la propiedad rural para campesinos, tiene el potencial de incidir en la resolución de las disputas territoriales por pretensiones sobre el mismo territorio, e impulsar ejercicios de gobernanza con acuerdos interculturales orientados al buen vivir en los territorios. Por tanto, si el proyecto se establece en áreas que el pueblo Barí reclama como ancestrales o en proceso de ampliación/saneamiento de sus resguardos, impondría una figura jurídica ajena a su propia concepción territorial y a sus derechos colectivos, generando una alteración a su situación jurídica sobre la tierra y su capacidad de ejercer su propia gobernanza y autonomía sobre el territorio.

(…)”

La anterior referencia, evidencia (primer párrafo) que fue esta misma Autoridad la que mencionó que la pretensión territorial de ampliación del Pueblo Indígena Motilón Barí colinda

por el lindero norte con el polígono del proyecto objeto de controversia. Y esto es evidente también por la referencia cartográfica que incluye el acto administrativo, que se confirma con aquella que adjunta la recurrente en su relato. Por lo tanto, en ningún momento se estableció que fuera un traslape el que diera como lugar la aseveración de posibles afectaciones directas.

Ahora se comprende por qué, si bien este despacho nunca se refirió a la existencia de un traslape, si se habla de coincidencia de contextos debido a que, como le ha sucedido anteriormente a la comunidad étnica, la invasión territorial y la imposición de economías ajenas han debilitado sus prácticas culturales y afectado sus fuentes de sustento. Y es precisamente esto la idea principal detrás de la argumentación esbozada por esta Autoridad y que se desea transmitir en la cita realizada por la recurrente; el hecho de establecer una Zona de Reserva Campesina, que pueda conllevar la posterior expansión de prácticas económicas o incluso posesión de terrenos, que generen afectaciones directas sobre el Pueblo Indígena Motilón Barí.

En consecuencia, si bien la recurrente decide citar sólo un apartado de lo desarrollado en la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025 a modo de presentar la idea de que la conclusión depende de la existencia de un traslape, y luego decide desvirtuar el mismo, la rápida digresión que hemos llevado a cabo revela que la conclusión de este despacho jamás dependió de un traslape, ni jamás se aludió la existencia del mismo.

Advertido lo anterior, vemos que sucede algo similar con el segundo argumento o segundo desarrollo argumentativo a modo de desvirtuación que realiza la recurrente.

En dicho ejercicio, la recurrente cita un apartado de la Resolución, donde esta Autoridad refiere el desarrollo de una economía agrícola intensiva, y luego, presenta que la generación de la afectación directa concluida por este Despacho depende de esa afirmación sin contexto y procede a desvirtuar su interpretación de lo establecido.

Por consiguiente, la recurrente se dedica a exponer la normativa relacionada con el objetivo de la Zona de Reserva Campesina y también refiere las obligaciones en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras en lo relacionado con el Plan de Desarrollo Sostenible, para desvirtuar su interpretación del apartado que cita sin contexto alguno.

Por lo cual, si bien es un ejercicio casi idéntico al anterior, a continuación corresponde de nuevo plasmar lo esbozado en la Resolución, resaltando en naranja la única parte que decide citar o referir la recurrente en el ejercicio argumentativo realizado:

“(…)

Sin embargo, la creación de una ZRC implica un cambio en la destinación de los territorios, dándoles una vocación agrícola, lo cual choca con el esquema tradicional Barí que privilegia la caza y la pesca. Esto interferiría con su cosmovisión, ya que la Ishta (territorio) es la base de su existencia y su identidad. La constante invasión territorial y la imposición de economías ajenas han debilitado sus prácticas culturales.

Por otro lado, la economía tradicional Barí se basa en la abundancia de recursos de su territorio, como la caza y la pesca. Si la ZRC promueve una economía agrícola intensiva en áreas ancestrales o de interés para los Barí, afectaría directamente sus fuentes de sustento y sus oficios tradicionales, forzándolos a adoptar modelos económicos occidentales y generando una pérdida de su autonomía alimentaria

(…)”

Se advierte entonces que haciendo caso omiso de lo establecido en el párrafo inmediatamente anterior en la digresión realizada en la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025, la recurrente decide concentrar su argumentación en la connotación de “intensiva” que se realiza en el apartado citado, y luego de exponer la normativa referente a las Zonas de Reserva Campesina y del Plan de Desarrollo Sostenible, concluye:

(...)

Como se ve, los objetivos de la ZRC no están asociados al desarrollo de economías extractivas o implantar modelos de desarrollo que no consideren el equilibrio y la protección ambiental, por esta razón sus apuestas están enmarcadas en la economía familiar y campesina, en la soberanía alimentaria y siempre de la mano de apuestas de orden ambiental para la protección del territorio.

Además, en la etapa de construcción del Plan de Desarrollo Sostenible la ANT debe realizar procesos de concertación con los actores del territorio, armonizar este instrumento con las prioridades definidas en los diferentes instrumentos de ordenamiento existentes y acatar el régimen de usos del suelo rural y las determinantes ambientales, así lo dispone el artículo 2.14.13.10 del Decreto 1071 de 2015 adicionado por el Decreto 1147 de 2024:

(...)

Por lo anterior se concluye que con la constitución de la ZRC no se busca promover la agricultura intensiva, por el contrario, las principales propuestas en materia productiva presentan una estructura basada en sistemas de pequeña y mediana escala, con predominio de cultivos permanentes como el cacao y el café y la cría de especies menores, por otra parte, en materia ambiental, se han definido líneas dirigidas a la conservación y gobernanza forestal, al cuidado del agua, todo lo cual quedara consignado en la zonificación ambiental de la ZRC. Razón por la cual definir que la ZRC promoverá la ganadería intensiva no es un argumento cierto puesto que esto no está alineado a los objetivos de la zona.

(...)"

Analizando entonces lo expuesto por la recurrente, su segundo ejercicio se enfoca en desvirtuar una supuesta explotación económica a gran escala (así entiende la connotación de "*intensiva*"), contraria a postulados de conservación ambiental, como si ese fuera el argumento referido por esta Subdirección para sustentar la existencia de posibles afectaciones directas sobre el Pueblo Indígena Motilón Barí. No obstante, teniendo el contexto y conocimiento de las ideas plasmadas en la Resolución, es evidente que se está haciendo referencia a la inherencia que puede tener la implementación de una economía agrícola distinta a las formas de sustento que tiene la comunidad (caza y pesca). Y es por esto, que decide omitir o no mencionar el párrafo anterior, en especial cuando refiere que "*la creación de una ZRC implica un cambio en la destinación de los territorios, dándoles una vocación agrícola, lo cual choca con el esquema tradicional Barí que privilegia la caza y la pesca*".

Y de nuevo, al igual que en el argumento anterior, lo que se está resaltando es que el hecho de establecer una Zona de Reserva Campesina en la zona, puede conllevar la expansión de prácticas económicas o incluso posesión de terrenos, que generen afectaciones directas sobre el Pueblo Indígena Motilón Barí.

De todo lo anterior se desprende que, se ha realizado una revisión y estudio de lo solicitado y argumentado por la recurrente, sin que ello conlleve una modificación de fondo de lo resuelto en el acto administrativo recusado, ya que si bien la recurrente se dedicó a desvirtuar sus interpretaciones de apartados sin contexto contenidos en el acto administrativo, su ejercicio no desvirtuó de ninguna manera las razones fundamentales por las cuales se determinó que procedía la consulta previa con el Pueblo Indígena Motilón, así como no demostró yerros endilgables a la administración que conllevasen revocar lo resuelto.

En consecuencia, el despacho confirmará en todas sus partes el acto administrativo censurado.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección Técnica de Consulta Previa,

RESUELVE:

PRIMERO. No reponer y, en consecuencia, **Confirmar** en todas sus partes la Resolución No. ST – 1435 del 16 de septiembre de 2025 que resolvió “*Sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades*” en el marco del desarrollo del proyecto denominado “**PROCESO DE SUSTRACCIÓN DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL PARA LA DECLARACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DE LOS MUNICIPIOS DE TIBÚ, EL TARRA, TEORAMA, SAN CALIXTO, EL CARMEN Y CONVENCIÓN**”, localizado en jurisdicción de los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, San Calixto, El Carmen y Convención, en el departamento Norte de Santander.

SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

TERCERO. Notifíquese a la parte recurrente en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ALFONSO ENRIQUE JIMÉNEZ ECHEVERRÍA
Subdirector Técnico de Consulta Previa

Elaboró: Alejandro Burgos. Abogado contratista Grupo de Actuaciones Administrativas de Procedencia de Consulta Previa.	Revisó: Simón Latorre Guzmán – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
Aprobó: Alfonso Jiménez Echeverría – Subdirector Técnico de la DANCP.	

T.R.D. 2710.4.291
2025-1-002400-079047 ; 2025-1-002410-080371

Notificación Electrónica: info@ant.gov.co; laura.cortes@ant.gov.co ; jennifer.gonzalez@ant.gov.co